

Mirza, Christian Adel. Capítulo III. Sistemas políticos y movimientos sociales: dos realidades interpenetradas. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza

CAPÍTULO III

SISTEMAS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES: DOS REALIDADES INTERPENETRADAS

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina.
2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap3.pdf>
Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

HEMOS SUBRAYADO CON INSISTENCIA la necesidad de examinar los vínculos entre los movimientos sociales y los sistemas políticos para obtener al menos algunas pistas o señales acerca de la evolución y el desarrollo de las democracias latinoamericanas en las dos décadas pasadas. Oportunamente señalamos la conveniencia de establecer ciertas correspondencias entre la acción social colectiva y las variaciones registradas muy especialmente en los sistemas de partidos y las instituciones más típicamente democráticas, para intentar adelantar algunas opiniones y valoraciones acerca de eventuales itinerarios en los países alcanzados y por extensión en el resto del subcontinente latinoamericano. Las hipótesis que propusimos focalizaban sus argumentos en la idea de una renovación de los papeles protagónicos de los movimientos sociales y su cenit alcanzado en escenarios en los que los partidos políticos y otras instituciones de la democracia representativa precisamente se ubicaban en su nadir sociopolítico. Uno y otro fenómeno responden, a nuestro juicio, a la intersección entre la desinstitucionalización y la deslegitimidad social profunda del sistema de partidos que, al mismo tiempo, contribuyeron a la emergencia, consolidación y revigorización de la sociedad civil organizada a través de sus movimientos sociales más relevantes. Así, podría mencionarse que la fragmentación y creciente debilidad de los partidos políticos en Ecuador, junto con la escasa capacidad de las organizaciones sindicales clásicas para enfrentar

los nuevos retos, producidos principalmente a consecuencia de un modelo económico neoliberal aplicado tardíamente, produjo a mediados de los años noventa el rebrote del movimiento indígena. Así, la CONAIE se plantó en el terreno como el actor principal de la resistencia, la rebeldía e intransigencia ante los avasallamientos contenidos durante décadas por ofertas de negociación convertidas en señuelos para impedir la protesta de los indígenas, los campesinos y los sectores históricamente excluidos en Ecuador.

Por otro lado, para desmentir a quienes pensaban que el movimiento obrero argentino estaba quebrado y derrotado, surgieron las novedosas formaciones en Argentina, como la CTA, consagrando una concepción horizontal y mucho menos burocratizada, la afiliación directa como aporte novedoso a las modalidades de adhesión y organización sindical, así como una autonomía que la central sindical asociada al peronismo –la CGT– no tenía. Casi simultáneamente surgía un Movimiento Piquetero, aún disperso, multifacético y plural, que ocupó y mantiene aún hoy un espacio significativamente importante en la realidad sociopolítica argentina.

El análisis exhaustivo y desagregado por país es informado por datos de la evolución en la confianza de las instituciones democráticas (en particular partidos políticos, Parlamento y Poder Ejecutivo), así como por la evolución del grado de satisfacción con la democracia, para los cuales nos remitimos a los cuadros y gráficos incluidos en el Anexo I, construidos en base a datos del Latinobarómetro. Para los datos electorales se solicitó información al Banco de Datos de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay).

ARGENTINA

Durante décadas, el sistema político argentino estuvo caracterizado por el bipartidismo centrado en el Partido Justicialista (peronismo) y la Unión Cívica Radical (UCR), con un predominio claro del primero en el ejercicio del gobierno. Las sucesivas interrupciones de la democracia en varios tramos de la historia contemporánea argentina culminaron en la década de los setenta con el quiebre producido en 1976, y luego con la restauración de las instituciones democráticas y el regreso de los partidos políticos al primer plano de la reconstrucción nacional, en 1983. Más tarde, luego de la anticipada renuncia del Dr. Raúl Alfonsín (ex presidente por la UCR), sobrevino una década de hegemonía peronista, pero con la impronta del “menemismo” (en alusión al presidente Carlos S. Menem), que impulsó hasta 1999 un extenso y profundo programa de reformas estructurales, y un Plan de Convertibilidad (“un peso, un dólar”), sobre la base del recetario más ortodoxo del neoliberalismo (contradictorio, por cierto, con la tradición peronista). En ese

año, la UCR reconquistaba el gobierno de la mano de una coalición con sectores políticos de centroizquierda, que convergió en la Alianza liderada por Fernando de la Rúa. Triste final para dicho presidente, que hubo de abandonar la Casa Rosada tras los trágicos episodios de diciembre de 2001, momento a partir del cual la nación argentina ingresó en su fase más crítica desde la recuperación democrática en 1983. Cuatro presidentes en dos semanas hubieron de asumir la máxima Jefatura del Estado, para que finalmente el ex gobernador Duhalde asumiera el período de transición, culminado formalmente con la celebración de nuevas elecciones (2003), en las que resultó vencedor el ahora presidente Néstor Kirchner, representante del ala de centroizquierda o más “progresista” del Partido Justicialista.

En este contexto, la valoración de las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía en general arroja saldos negativos. En primer lugar, la confianza en los partidos políticos pasa del 17% en 1996 al 8,3% para el año 2003, habiendo registrado su punto más bajo en el año 2002, con apenas 4,8% de valoración positiva. Vale decir que en siete años los partidos políticos redujeron de manera sensible (casi doce puntos) el grado de confianza por parte de la población. En segundo lugar, la confianza en el Parlamento (Congreso), pasa de un 25% en 1996 al 13,5% en el año 2003, lo que evidencia también, y en guarismos más alarmantes, la pérdida de legitimidad de la expresión paradigmática que tiene la arquitectura institucional de la democracia. En tercer lugar, la satisfacción con la democracia también registra un descenso significativo (sobre todo considerando el nivel del cual se parte), pasando de un 34,11% de la población que respondía estar satisfecho, a un porcentaje del 8% en el año 2002, pero que repunta al 34% nuevamente en 2003. En cuarto lugar, el porcentaje de la población que deposita su confianza en la figura del presidente o del Poder Ejecutivo aumenta de un 19,8% en 1996 a un 44,6% en 2003; claro está, después de haber sufrido una caída estrepitosa en los años 2001-2002 (6,6%) por razones bien conocidas. Agregamos, en quinto lugar, que la abstención electoral se mantuvo más o menos constante en el tramo comprendido entre 1996 y 2003. Es importante tener en cuenta que el promedio del número efectivo de partidos (NEP) del período es de 2,5 (consideradas las dos elecciones, 1999 y 2003).

Por último, si según la perspectiva de Mainwaring y Scully, el modelo argentino podía ser incluido en la categoría de sistema institucionalizado en 1995; pensamos que las variaciones de algunos de sus rasgos definitorios podrían dibujar una tendencia a ubicarse en la misma categoría pero con menor nivel de institucionalización, principalmente en función de dos indicadores: la solidez de sus organizaciones políticas (lealtad y alineamiento) y el grado de confianza y legitimidad en los partidos políticos (aspecto que ya analizáramos).

Durante los años noventa, el movimiento sindical registra una trascendente escisión que origina la fundación de una nueva central sindical (CTA, 1992), con una importante base de apoyo, no sólo conformada por organizaciones sindicales preexistentes, sino con amplios sectores de desocupados, grupos de raíz barrial o territorial, productores y profesionales de diversa extracción socioeconómica. Muy poco después surge con vigor el Movimiento Piquetero (MTD, 1996), a partir de la conformación de múltiples organizaciones (FTV, CCC, MIJD, MTD Aníbal Verón, MTR, entre otras), que aglutinan en su interior orientaciones diversas, que convergen sin embargo en la acción social colectiva concertada de un porcentaje muy relevante de los desocupados argentinos. En ambos casos, el nivel de organicidad es medio y alto, sobre todo el de la CTA, que presenta una fuerte estructuración y anclaje a nivel territorial. Para el caso de los MTD, existe aún un grado de fragmentación y dispersión que expresa aspectos favorables (más autonomía, horizontalidad y participación) y aspectos menos ventajosos, en términos de obtener mayor eficacia y coherencia como movimiento social. Sin embargo, el Movimiento Piquetero ha tenido una alta capacidad de convocatoria y movilización social, lo mismo que la CTA, coincidiendo en un discurso político que refleja como puntos en común el rechazo al modelo neoliberal, la reivindicación de la soberanía nacional y el enfrentamiento decidido a las políticas impulsadas desde el FMI, como así también una reafirmación democratizadora, que en el caso del Movimiento Piquetero pone fuerte énfasis en la participación y autogestión (como por ejemplo, el caso de la Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón), y una clara connotación antisistémica.

Si consideramos la autonomía como variable dependiente, observamos que los movimientos sociales emergentes en la década de los noventa presentaron un grado mayor de autonomía respecto de los partidos políticos y el Estado que en décadas anteriores (aunque corresponde destacar que la labor y el despliegue del movimiento de derechos humanos jugó un papel significativo –sobre todo en los años ochenta– y no sujeto a las orientaciones provistas de modo heterónomo por los partidos políticos, sin desconocer lógicamente la influencia de las fuerzas de izquierda en el devenir de aquellos), aun cuando para el caso del Movimiento Piquetero debe señalarse la estrecha vinculación entre diferentes corrientes de la izquierda argentina con organizaciones de desocupados y, de manera más difuminada, con la CTA. Asimismo, la lógica de la demanda y asignación de los Planes Trabajar para jefas y jefes de hogar (subsidios directos) podría presuponer la existencia de vínculos de “dependencia moderada” respecto del Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal). De hecho, la denuncia de la acción de los *punteros* indicaría una conciencia clara de los dirigentes y militantes más activos, tendiente a combatir ciertas prácticas neoclien-

telares dentro del movimiento de desocupados. De todos modos, la muy alta capacidad de convocatoria y movilización, tanto de la CTA como de los piqueteros, es un dato importante a la hora de establecer una conclusión acerca de las ataduras con el gobierno, y la amplitud de la capacidad de decisión y definición de estrategias sociopolíticas de los movimientos sociales emergentes.

En suma, a nuestro juicio hay suficiente evidencia para establecer una correspondencia entre la fragilidad y el debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas en Argentina y su efecto “promotor” de una mayor densidad de la acción social colectiva, expresada en los movimientos sociales que surgen y se consolidan en el mismo período de decaimiento del sistema político. Son movimientos sociales más autónomos, que disputan los campos de la representatividad y legitimidad a los partidos políticos, en algunos casos (aunque minoritarios) con vistas a sustituirlos o –al menos– competir con ellos en la arena propiamente política electoral (candidatura de Luis D’Elía en Buenos Aires, y el entonces anuncio de Raúl Castells para la contienda nacional del año 2004). El discurso alerta acerca de la flaqueza y degradación de la democracia, pero en clave de su recuperación, renovación o refundación, en tanto se advierte su trascendencia y su carácter de irremplazable como sistema de convivencia, resolución de conflictos y participación ciudadana. Sin embargo, se adjuntan otros conceptos a la democracia: se la adjetiva como democracia participativa y al servicio de las grandes mayorías que se encuentran ajenas a los circuitos de las elites de partido y de gobierno.

Los clivajes del conflicto social están determinados por los impactos de una política económica y un modelo excluyente, que arrojó a miles de argentinos a la condición de “innecesarios” para la producción capitalista (se reclama por trabajo digno y no tanto contra la explotación); la congregación policlasista de los movimientos obliga a redefinir la ecuación de los antagonistas, y empuja a la articulación de actores sociales de diversa naturaleza pero cuyos intereses coinciden en aspectos esenciales. Las plataformas sociales ampliadas (coordinaciones programáticas, acciones sostenidas de manera temporal, confluencia en movilizaciones sociales masivas) restablecen las confianzas entre movimientos sociales, y refuerzan las capacidades de respuesta y propuesta ante los demás actores sociales y políticos. Asimismo, los sectores o partidos políticos de centroizquierda e izquierda se asoman a una realidad mucho más dinámica y lábil, intentando constituirse como canal y vocería de las demandas sociales, al mismo tiempo que –a partir de la reconfiguración del mapa político en el año 2003– recomponen sus vínculos con los movimientos sociales desde una perspectiva común en el sentido de transformación del modelo, aunque con dife-

rencias respecto del objeto mismo del cambio (la política, la economía, la cultura) y sus alcances.

BRASIL

La evolución democrática de Brasil, también –como en otras naciones latinoamericanas– fue interrumpida por efecto de una dictadura militar en 1964, prolongándose el período autoritario hasta principios de los ochenta; sin embargo, la recomposición del sistema político no implicó la restitución plena del esquema predominante previo al golpe de Estado. Conviene traer a colación la campaña por “Directas Ya”, en 1984 –durante la etapa de transición–, en reclamo de elecciones presidenciales por votación popular y no por delegación en colegios electorales; en tal sentido, y pese a las importantes y masivas marchas por las principales ciudades de Brasil y una movilización generalizada, la oposición y los movimientos sociales emergentes no consiguieron su objetivo, aunque fueron el inicio y un estímulo a los sectores sociales y políticos de oposición para su creciente fortalecimiento. Finalmente, recién en 1989, después de veintinueve años, se llegó a la primera elección presidencial por voto popular. El triunfador en aquella ocasión fue Fernando Collor de Mello, luego acusado por corrupción y suspendido en sus funciones para dejar en su lugar al vicepresidente, Itamar Franco, cuyo ministro de Hacienda se convirtió poco tiempo después en el presidente de Brasil por dos períodos consecutivos y por una amplia mayoría. Fernando Henrique Cardoso, efectivamente, sería el primer mandatario entre 1994 y 2002, hasta la asunción de Lula da Silva en enero de 2003. El sistema político cambió de manera sustantiva en las últimas dos décadas, desde un predominio de fuerzas políticas de la derecha (algunas de las cuales aferradas al pasado autoritario) y centroderecha (con retórica convincente y eficiencia gubernativa), a una prevalencia de los sectores de centroizquierda e izquierda, encabezados por el partido mayoritario, el Partido de los Trabajadores del ex líder sindical metalúrgico Lula da Silva. Si consideramos la evolución del número efectivo de partidos, veremos que se mantiene un perfil de sistema multipartidario moderado con tendencia a la fragmentación; así, el valor NEP para 1994 era de 2,7 y para el año 2003 de 3,5, con una presencia muy fuerte del PT, pero en alianza con otros partidos y fuerzas de centro y de izquierda neta.

Respecto de los indicadores de confianza en los partidos políticos, partimos de un 16,9% en 1996, que pasa a situarse en un 15,8% en el año 2003; un descenso mínimo, lo que podría asimilarse a un valor constante en el período considerado (una media de 17,6%). En relación con la confianza en el Parlamento, los datos disponibles nos ilustran respecto de una variación positiva, esto es, un incremento importante

del nivel de confianza, que pasa del 19,4% en 1996 a un 28,5% en el año 2003. En referencia a la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo o en la figura del presidente, identificamos un incremento que va de un 25,1% en 1996 a un 42,3% en 2003, registrándose dos saltos leves a la baja, uno en 1999 y otro en 2002, pero que pueden considerarse poco significativos. La conclusión preliminar se aproxima a una alta valoración del papel que juega la Presidencia, obviamente muy asociado a la persona que desempeña el máximo cargo de gobierno (Cardoso en sus dos períodos de gobierno y, para el año 2003, el nuevo mandatario que representa al PT, Lula da Silva).

En cuanto a los niveles de satisfacción con la democracia, los datos señalan un descenso mínimo, que va del 21,1% en 1996 a un 21% en 2002, lo que implica una variación porcentual absolutamente irrelevante, aunque consideremos ambos porcentajes bajos en la consideración del sistema democrático correlacionada con la expectativa social de la población (esto es, el desempeño del conjunto de sus instituciones y sus resultados plausibles en términos de mejora de la economía y de la calidad de vida de los ciudadanos). Por último, destacamos una alta participación electoral en el período de análisis, con un 76,85% de ciudadanos habilitados que concurrieron a las urnas en 1994, un 81,03% que participaron en los comicios de 1998 y un 79,53% que lo hicieron en las últimas elecciones del año 2002 (vale decir, con los registros más altos, después de Uruguay y Argentina).

Al examinar el sistema político brasileño desde la perspectiva del modelo de institucionalización de Mainwaring y Scully, observamos que para 1995 este era caracterizado en la categoría de *incoativo*, en función de su regularidad poco evidente, de las variaciones en el núcleo de lealtades y alineamientos que nutren la solidez de las organizaciones políticas, y la ausencia de raíces profundas de las colectividades partidarias en la sociedad. Estos rasgos parecieran ir modificándose en los últimos ocho años, lo que nos exige al menos establecer como hipótesis que el sistema político en Brasil se encontraría transitando una fase de creciente institucionalización.

Si bien los datos examinados en cuanto a la evolución de los indicadores de valoración de las principales instituciones democráticas no alcanzan a la década de los ochenta, razón por la cual no podemos correlacionarlos directamente con la emergencia o el surgimiento de los movimientos sociales analizados, sí establecemos comparaciones contemporáneas respecto del período comprendido en el tramo 1996-2003, coincidente con el primer y segundo gobiernos de Cardoso y con una etapa de mayor institucionalización, según nuestro marco de análisis. Conviene recordar que, para Mainwaring y Scully, el sistema *incoativo* se caracteriza por el bajo nivel de institucionalización, alto grado de fragmentación del sistema de partidos, raíces poco profun-

das y extendidas de las organizaciones políticas, e inestabilidad global del sistema político.

Los movimientos sociales que consideramos son contemporáneos en su nacimiento y primer desarrollo: tanto la CUT como el MST surgen en 1983 y 1984 respectivamente, en tiempos de la transición democrática y la reconstrucción del esquema constitucional de derecho. La CUT como central de trabajadores se constituyó como principal y casi único referente del movimiento sindical de la nueva generación renovadora, removiendo viejas prácticas de tutelaje y dependencia del sistema político (partidos y gobierno). A lo largo de su desarrollo, la CUT logró posicionarse como fuerza alternativa y genuina representante de la clase obrera brasileña, consolidando un alto grado de organicidad, convocatoria y movilización social, pese a un decaimiento en los primeros años de la década del noventa. Por su lado, el MST logró expandir su influencia a prácticamente todo el territorio, tejendo una red inmensa de pequeños y medianos núcleos de campesinos sin tierra, acampantes, productores y colonos. Su estructura orgánica es sólida, expandida aunque no burocratizada, y comparte el discurso político con la CUT en términos de interpelar el modelo neoliberal. El eje de la reforma agraria construye un discurso que trasciende el mero reparto de tierras, para reclamar la necesidad de una profunda transformación de las estructuras productivas en el marco de un proyecto de desarrollo sustancialmente diferente. Ambos movimientos sociales se proclaman antiimperialistas y defienden la soberanía nacional; la CUT hace hincapié en la lucha de clases y en la idea de un socialismo como meta final; los dos valoran la democracia y la enmarcan en proyectos de transformaciones profundas de la sociedad y el Estado. Podríamos aseverar que tanto la CUT como el MST asumen un perfil de movimientos antisistémicos, en especial el MST, que ha generado una capacidad de articulación de base muy grande, con correlatos de prácticas sociales participativas autogestionarias.

El sistema político, según nuestra interpretación, estaría atravesando una fase de transición entre la escasa institucionalización de los ochenta (incoativo) a un modelo institucionalizado en los inicios del siglo XXI, mostrando simultáneamente una tonificación y un mayor despliegue de la acción social colectiva en dicha fase –mérito obviamente de la población y de los trabajadores, pero acicateados por un clima propicio al desarrollo y crecimiento de actores sociales mucho más contestatarios, propositivos en términos de proyectos societales de envergadura–. La clave para su posterior evolución refiere a la capacidad de mantener la autonomía social sin dejar de ejercer sus fueros en el terreno sociopolítico. De esta manera, examinando el caso del MST, coincidimos con muchos analistas que ponen de relieve su autonomía casi como un valor intrínseco y aprehendido por el conjunto de sus

dirigentes, cuadros y militantes sociales. Ello les permite obtener mayores réditos de legitimidad y credibilidad popular; al mismo tiempo que posicionarse como actor social en su relación con el Estado y los partidos políticos, en particular con el actual partido de gobierno, el PT, el cual evidentemente cuenta con una enorme base de apoyo y respaldo en aquel y en otros movimientos sociales.

No subestimamos por cierto ni la complejidad ni las contradicciones generadas por la asunción del gobierno de un partido político nacido y madurado en la faena opositora. Sobrevienen un conjunto de problemas nuevos, tanto para el PT como para los dos movimientos aquí estudiados, ambos con vínculos más que estrechos, profundamente imbricados y amasados en tiempos de la transición democrática, como en las recientes luchas en contra de la aplicación del recetario neoliberal. Aquella autonomía estaría jaqueada si desde el Estado, como desde el Partido de los Trabajadores, las presiones para el realineamiento de los actores sociales se tornaran insostenibles y lesivas a sus intereses específicos. Precisamente, el debate actual ha ocasionado algunas fricciones entre las diversas corrientes dentro del movimiento sindical, aglutinado principalmente en la CUT, y en sintonía con algunas posturas y críticas en el año 2003 provenientes del seno del PT, originando a su vez conflictos entre sus fracciones mayoritarias y minoritarias.

ECUADOR

Después del período militar en los años setenta, y tras la recuperación de la democracia, asumía en 1979 el entonces líder de la socialdemocracia, Jaime Roldós, que intentó generar una política de integración de los sectores sociales marginados o excluidos de las zonas rurales y urbanas más empobrecidas, en el marco de un relacionamiento bastante dificultoso con el Parlamento y la oposición. A su muerte, en un accidente aéreo en 1981, asumió el vicepresidente Osvaldo Hurtado, y el país ingresó en una crisis económica y social aguda, que facilitó el acceso al gobierno de los partidos más conservadores que ejercieron el poder durante la década de los noventa, entre cuyos mandatarios recordamos a Sixto Durán Ballén, quien puso en marcha un plan de privatizaciones de las principales empresas estatales y una política de ajustes fiscales y estructurales de cuño neoliberal (flexibilización y desregulación del mercado de trabajo, reformas laborales). Poco después asumía el populista Abdalá Bucaram, luego depuesto por el Congreso por razones de incompetencia intelectual (fue declarado “insano” mentalmente y luego destituido). De esta manera llegaba –tras las elecciones del año 1998– el líder socialcristiano Jamil Mahuad, quien enfrentaría también una aguda crisis económica y financiera (a la que intentó resolver con la dolarización completa de la economía ecuatoriana), con severas re-

percusiones sociales, provocando una de las revueltas populares más furibundas, y su posterior caída en el mes de enero del año 2000. Luego del período de transición aceptado por las fuerzas de oposición, se celebraron las elecciones del año 2002, en las cuales finalmente resultó triunfador el coronel Lucio Gutiérrez, con el apoyo del movimiento indígena representado por una fuerza política, el Movimiento Pachakutik (MUPP), que aceptó integrar el gabinete del novel presidente. Pocos meses después, las discrepancias visibles entre los aliados y la Sociedad Patriótica 21 de Enero (oficialista) dieron lugar al retiro del MUPP del gabinete de Gutiérrez en el año 2003.

Al analizar los indicadores de confianza en los partidos políticos, constatamos una fuerte caída, del 18,6% en 1996 (ya con registros bajos) al 8,3% en el año 2003. En la evolución de la serie no encontramos ningún momento de repunte, sino una tendencia descendente, tal vez más pronunciada entre los años 1996 a 1999. Con relación a la confianza en el Parlamento, los datos son también elocuentes: un 26,9% en 1996 y apenas un 5,8% en 2003, diferencia abrumadora que pone en evidencia la paupérrima valoración de la ciudadanía ecuatoriana respecto de una de las instituciones emblemáticas de la democracia. Si consideramos ahora el grado de satisfacción con la democracia, el porcentaje en 1996 se ubicaba en 33,2%, mientras que para el año 2003 (últimos datos disponibles del Latinobarómetro) había bajado a 16%, lo que representa una caída de más del 50% en siete años de ejercicio de las instituciones democráticas. Al examinar los resultados relativos a la confianza en el presidente, los datos arrojan también un decrecimiento notable, del 34,3% en 1996 al 9,9% en 2003. Desde la perspectiva del modelo de institucionalización, el sistema ecuatoriano se define como incoativo, con alta fragmentación del sistema de partidos (NEP = 5,8), inestabilidad en los últimos diez años, pérdida sustantiva de la legitimidad y confianza en los partidos políticos, pérdida de confianza en prácticamente todas las instituciones democráticas, degradación de la solidez de las organizaciones políticas (dislocamiento de la identificación con los partidos históricamente más representativos, desalineamiento y débil mantenimiento de las lealtades), todo lo cual contribuye a la generación de opciones nuevas y diferentes (Sociedad Patriótica 21 de Enero, MUPP).

Del lado de los movimientos sociales hemos estudiado el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cuyo origen se remonta al año 1975, y a la CONAIE, cuya emergencia como movimiento indígena se visualiza en 1986, aun cuando otras formaciones del indigenismo autóctono pueden rastrearse en décadas anteriores. El movimiento indígena salta a la escena pública, sobre todo a partir de sucesivos levantamientos, desde el primer año de la década del noventa, para situarse claramente como un interlocutor insoslayable para el sistema político todo (parti-

dos, Parlamento, gobierno). Presenta una alta capacidad de convocatoria y movilización social, a diferencia del FUT, el cual fue perdiendo peso específico en el concierto de los movimientos sociales ecuatorianos, aunque en numerosas ocasiones ha acompañado y coordinado movilizaciones conjuntas con los indígenas y campesinos. Fuertemente organizado el movimiento indígena alrededor de la CONAIE, de arraigo social en las capas más bajas y marginadas, también a partir de su discurso y práctica se ha erigido en representante de una porción muy grande de la población ecuatoriana, más allá de las diversas agregaciones étnicas. El discurso antineoliberal, antisistémico, apunta mucho más allá de la reclamada reforma agraria y propone una transformación institucional del Estado, radical y profunda, sustentada entre otras ideas en la plurinacionalidad, el respeto a la diversidad multicultural, la autodeterminación y territorialidad, la necesaria democratización del poder y un modelo económico (de tipo comunitarista) situado en las antípodas del actual esquema capitalista individualista. Por otra parte, la autonomía de la CONAIE ha sido su rúbrica durante los años de su gestación, crecimiento y desarrollo, aun cuando subyace la incertidumbre respecto de cómo se habrá de dirimir finalmente su imbricación con el movimiento Pachakutik, hecho casi “a su medida” como instrumento político junto con otras organizaciones populares.

La controversia emanada de sus compromisos con la gestión del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez admite varias lecturas, todas polémicas; o se interpone el movimiento indígena en la dilucidación de la autonomía reivindicando su “paternidad” (en consecuencia, la autonomía de la CONAIE prevalece ante el instrumento partidario), o bien se produce un nuevo dislocamiento a partir de la definición de autonomía en favor del movimiento político. En cualquiera de las hipótesis, la CONAIE podría preservar su autonomía como actor social, en la medida en que se distingan las lógicas de uno y otro actor en la arena sociopolítica. El FUT, en tanto, posee un historial más frondoso, pero ha perdido eficacia y parte de su equipamiento de cuadros para suscitar y movilizar apoyos masivos de la clase obrera, amén de padecer los efectos del modelo neoliberal en la reestructuración de la industria nacional, y la reinserción productiva en los circuitos de la economía mundial (lo que ha mermado notablemente su tasa de afiliación). El desmantelamiento de los factores socioculturales y económicos que favorecían una articulación de la clase obrera organizada, a lo que se agrega una normativa laboral que le resultó perjudicial y una responsabilidad propia por la dificultad de encontrar opciones innovadoras en las formas de organización, estrategias de lucha y convocatoria social, hacen del FUT un actor social débil, aunque todavía presente. Los clivajes giran en torno a la distribución del poder político y económico; a los papeles del Estado y su función de integración (Estado nacional o plurinacio-

nal), también en torno a la hegemonía de las clases dominantes en su disputa con las clases subalternas, toda vez que estas han verificado en el terreno confrontacional su capacidad de cambiar el rumbo político, al menos parcialmente.

Sostenemos la existencia de una correlación efectiva entre pérdida de confianza en las instituciones democráticas y un mayor desarrollo de la acción social colectiva; en el caso de Ecuador el ejemplo de la CONAIE nos parece ilustrativo. Asimismo, la mayor autonomía del movimiento indígena revela una capacidad de superar holgadamente las fronteras y cotas marcadas por la reivindicación particularista y las demandas singulares, para traducir un conjunto de propuestas, marcos de acción y prácticas sociales en un proyecto que restituye la esencia de la democracia: participar y decidir con tolerancia y respeto a la pluralidad. El movimiento indígena no abjura del sistema democrático, sino que reniega de “un sistema democrático” a todas luces imperfecto e incompleto, ajeno en gran medida a las vicisitudes de la enorme mayoría pauperizada. La consolidación de la CONAIE y la decisión de participar en la contienda electoral constituyen un buen argumento para demostrar que, cuando el sistema de partidos no responde las expectativas de la ciudadanía, los movimientos sociales que de ella surgen, asumen una función similar o emparentada con la de los partidos políticos.

URUGUAY

La dictadura militar abarcó más de una década, desde 1973 hasta la restauración de la democracia en 1984, dejando un lastre, en consonancia con su prédica y práctica del terror, que la heredó tristemente con sus pares en el Cono Sur. Pasada la época del autoritarismo, a partir de la resistencia civil y política se desencadenó un proceso remozado de recuperación de las aptitudes del sistema político, que representaban esperanzas en la conformación de consensos para reconstruir el país desgarrado. La vitalidad y efervescencia de la sociedad civil, fruto del empuje de movimientos sociales (el sindicalismo joven, el movimiento cooperativo de vivienda, el movimiento estudiantil, además de una miríada de organizaciones territoriales o vecinales, junto con organizaciones no gubernamentales y los movimientos por verdad y justicia), coadyuvaron de manera fundamental a la retirada de los enclaves autoritarios y posibilitaron una salida pacífica de los militares.

Luego se sucedieron de manera consecutiva cuatro períodos de gobierno de los partidos tradicionales (conservadores); el sistema de partidos se recompuso y pasó de una primera fase (hasta 1989) de neto predominio del formato bipartidista, a una fase caracterizada por el pluripartidismo moderado (en virtud del avance de la coalición de izquierda), para entrar en una tercera fase (1999-2004) signada por la

tendencia a reconfigurarse un nuevo formato bipartidista con otros actores políticos (de un lado una amplia coalición de centroizquierda y del otro un “partido conservador” desdoblado en las dos formaciones históricas, ya muy disminuidas), que intentan retener los clivajes del poder mantenidos desde los tiempos fundacionales de la nación y el Estado. Sin duda, se trata de uno de los sistemas más institucionalizados de América Latina, según el modelo de Mainwaring y Scully, por poseer rasgos de fuerte identificación partidaria, regularidad –incluso con la irrupción de las fuerzas de centroizquierda– y enraizamiento en la sociedad, y cuyas organizaciones políticas aún mantienen cierta reserva de credibilidad y confianza, pese a la reciente evolución de los indicadores que reseñamos a continuación.

En primer lugar, la confianza en los partidos políticos pasa de un 31,6% en 1996 a un 17,9% en 2003, lo que reporta variaciones importantes, explicables por el descenso abrupto a partir del año 2002 en función del colapso financiero acaecido precisamente ese año. En segundo lugar, la confianza que registra el Parlamento da cuenta de un descenso agudo, sobre todo –y en correspondencia con lo señalado para los partidos– en el año en que se desata una de las peores crisis económica y social; es así que el nivel de confianza pasó de un 37,8% en 1996 a un 26,5% en 2003. En tercer lugar, respecto de la satisfacción con la democracia, un 51,3% de la población manifestaba muy positivamente su satisfacción en 1996, mientras que para el año 2003 (últimas cifras disponibles) la proporción, sensiblemente disminuida, se ubicaba en un 43%, aun cuando el año anterior registraba un 53%. En cuarto lugar, sobre la figura del presidente, se observa que en 1996, un 35,7% expresaba confianza, en tanto que en el año 2003 esta confianza había descendido al 19,2%.

Los movimientos sociales analizados, el sindical (PIT-CNT) y el movimiento cooperativista de vivienda (FUCVAM), recobran en los años ochenta un papel protagónico, forjado en décadas anteriores durante la resistencia y la clandestinidad. Si bien es cierto que la CNT (1964) es la central sindical de origen y el PIT-CNT constituye de hecho su continuidad histórica, a los efectos de nuestro estudio consideramos un momento refundacional ubicado a principios de los ochenta (1983-1984), mientras que para el caso de FUCVAM el nacimiento formal se sitúa en 1970 y su “renacimiento” se asocia al año 1983, en tiempos de la transición democrática. Durante aquella etapa, los dos actores sociales se erigieron como baluartes no sólo de la resistencia a la dictadura, sino de la transición democrática, dando cuenta de un apego al derecho y las normas constitucionales, sobre todo en defensa de las libertades, y con capacidad de proponer alternativas plausibles para la recuperación económica y social del país. Sin embargo, el regreso al primer plano de la arena pública de los partidos políticos pareció desdibujar paulatina-

mente aquel rol protagónico de los movimientos sociales, confiriéndoles un marco de actuaciones en el territorio de las reivindicaciones sociales (muchas de ellas corporativas), al restablecerse los puentes entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

La confianza en las instituciones democráticas tuvo su etapa de auge entre 1984 y 2001, a partir del cual identificamos un punto de inflexión que empuja dos indicadores –confianza en el Parlamento y en los partidos políticos– a la baja abrupta, aunque el grado de satisfacción con la democracia se mantuvo casi en los mismos niveles. Durante el último tramo que analizamos, 2001 a 2004, pueden observarse picos en la protesta social y sobre todo avances en la constitución de plataformas sociales amplias entre varios actores y movimientos, enfrentados a la peor crisis económica y social de los últimos treinta años. La campaña en contra de las privatizaciones que se iniciara con éxito en 1992 (que impidió la privatización de la empresa ANTEL), culminó exitosamente en el año 2003 con el referéndum que detuvo la Ley de Asociación de la empresa estatal ANCAP, con un margen de apoyo muy alto (más del 60% de la población). Ambas organizaciones sociales, FUCVAM y el PIT-CNT, jugaron un papel decisivo en la promoción, el impulso y en el resultado final de aquel plebiscito popular. A nuestro juicio, los dos movimientos sociales (trabajadores y cooperativistas) conservan un grado medio de convocatoria, aun cuando hayan perdido parte de sus reservas de movilización social en la década de los noventa.

La capacidad propositiva es alta, lo mismo que su estructura orgánica (asentada en núcleos de militantes, cuadros y dirigentes expandidos en las capas subalternas y medias). Son actores sociales ya consolidados y apanados en la lógica de la resistencia, primero al autoritarismo y luego al modelo neoliberal que intentó aplicarse a rajatabla, sobre todo a partir de 1990 (bajo el mandato de Luis Alberto Lacalle, y luego en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti). Su autonomía, permanentemente interpelada, es real y efectiva, pero mediatizada por fuertes vínculos entre los partidos de signo progresista o de izquierda, que en ocasiones generan recortes y zonas de incertidumbre respecto de la capacidad de establecer de modo autárquico las orientaciones estratégicas del movimiento sindical. El discurso tanto del PIT-CNT como de FUCVAM comparte la crítica al neoliberalismo, que reivindica la lucha de clases en el caso del movimiento sindical, y la autogestión social en el caso de FUCVAM. Ambos enfatizan la necesidad de defender la soberanía frente a los embates del neocolonialismo o imperialismo norteamericano, denostando el modelo capitalista de producción y distribución de la renta (destructor del trabajo e inequitativo), con especial acento en la idea de una democracia que implique la participación ciudadana.

En términos de correlación directa entre descenso de los niveles de confianza en los partidos políticos y en otras instituciones de la democracia, no se registran hallazgos significativos traducidos en nuevos movimientos sociales emergentes (lo que no significa subestimar la existencia de una rica y plural variedad de organizaciones sociales de raigambre popular). No obstante, el sistema político uruguayo institucionalizado, con partidos políticos enraizados en la ciudadanía, conectados fuertemente con organizaciones sociales (sobre todo los partidos de centro e izquierda), que mantuvieron durante muchas décadas las lealtades y el alineamiento de los votantes y las elites, imprescindibles para su reproducción social, nos sugiere la pervivencia de una cultura política bien desarrollada, anclada en una alta valoración de su sociedad respecto de las normas de regulación del conflicto en el ejercicio de la democracia: el lugar para los movimientos sociales permanece en la clásica diferenciación de la esfera social pública y la esfera de la política institucional (disputa por el control del Estado y los aparatos burocráticos de gestión de políticas). Así, les caben a los movimientos sociales legítimas intervenciones desde la órbita de la sociedad civil, y menos en la órbita de la contienda política que dirige los elencos de gobierno. Los partidos políticos siguen despertando la adhesión ciudadana, aunque hayan perdido legitimidad en términos globales, y el Parlamento sea enjuiciado por sus falencias. Podríamos interpretar que la brusca caída del grado de satisfacción con la democracia a partir del año 2001 se asocia directamente con la fase económica recesiva y de sensible degradación del bienestar de la población; no obstante, los altos niveles que aún se registran estarían apelando a una convicción internalizada en la mayoría de la ciudadanía del “valor de la democracia” como el mejor sistema político, más allá e independientemente de toda circunstancia.

CHILE

Los análisis de los sistemas políticos y movimientos sociales en Chile, Paraguay y Venezuela habrán de utilizarse como casos espejos de los anteriores. El nivel de profundización es menor, pero de todos modos útil para un abordaje más general y concluyente en términos de tendencias para el subcontinente latinoamericano.

La dictadura chilena fue probablemente una de las más represivas y sangrientas del Cono Sur, instalada en el poder desde el año mismo del golpe de Estado, el 11 de setiembre de 1973, hasta el regreso a la institucionalidad democrática en 1989. La recuperación fue sin duda trabajosa e intrincada, al punto que varios analistas políticos caracterizan la transición a una democracia recortada o incompleta, con incrustaciones autoritarias en la Constitución vigente. De todos modos,

el primer gobierno democrático, a cuyo frente estuvo el democristiano Patricio Aylwin, surge de un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios (socialistas y demócrata cristianos), anudados en la Concertación Democrática. El mapa político se recompone así con un formato multipartidario tripolar y un esquema bipartidista *gobierno-oposición parlamentaria*, fuerte presidencialismo y mantenimiento de un número efectivo de partidos de 4,85 (PS, PPD, DC, RN, UDI), aun cuando la división tripartita sigue existiendo bajo una competencia bipolar temporal. El sistema anterior al período autoritario presentaba un esquema caracterizado por “gobiernos minoritarios con grandes proyectos de cambio sin mayorías o coaliciones estables; pluripartidismo polarizado; presidencialismo fuerte pero minoritario y finalmente un Estado centralizado y unitario” (Mirza, 2002). Los gobiernos sucesivos en Chile desde el primer triunfo de la Concertación fueron consolidando la primacía de los dos partidos antedichos y una articulación sostenida, sobre todo en la primera fase de la transición, con los movimientos sociales y actores emergentes de la sociedad civil (movimiento obrero, campesino, indígena, vecinal o de pobladores, derechos humanos, estudiantil, entre otros). No obstante, el lastre del autoritarismo pesa en la dinámica chilena, entre otros factores por las perturbaciones provocadas por la presencia del general Augusto Pinochet, el respaldo que este aún posee en las filas del Ejército, y las dificultades en dilucidar definitivamente la cuestión de los derechos humanos.

En cuanto al sistema político, teniendo en cuenta los indicadores de confianza en las instituciones democráticas, los datos son bien interesantes. En primer lugar, en referencia a los partidos políticos, la encuesta realizada por el Latinobarómetro indicaba que en 1996 un 27,3% manifestaba su confianza en ellos, en tanto que siete años después, en el año 2003, la cifra descendía al 13,4%, diferencia bastante significativa. En lo relativo al Parlamento, los datos arrojan también una caída de un 42,3% en 1996 a un 22,3, prácticamente la mitad; vale decir que se observa un deterioro considerable en la imagen de una institución específicamente propia del sistema democrático. Por otro lado, la confianza en la figura del presidente (Poder Ejecutivo en su máxima expresión, sobre todo en un régimen presidencialista como el chileno) pasaba de un 50,7% en 1996 (bastante elevado en comparación con los otros países) a un 47,2% en 2003, lo que de hecho no implica una pérdida sustantiva de confianza. Conviene aclarar, sin embargo, que en los registros de años anteriores el nivel de confianza estuvo bien por encima del 50%, alcanzado su tope en 1999 con un valor del 60% de la ciudadanía. Por otra parte, el grado de satisfacción con la democracia se ubicaba para 1996 en un valor del 27,6%, para situarse en un 33% en el año 2003 (según los últimos datos proporcionados por el Latinobarómetro), en rigor, una variación poco significativa. Siguiendo el modelo

de institucionalización de Mainwaring y Scully, Chile corresponde típicamente, junto con Uruguay, a la categoría de sistema institucionalizado, con un nivel alto de regularidad y estabilidad política, un sistema de partidos enraizado y con fuertes conexiones con las organizaciones sociales, y cuyas organizaciones políticas asumen un perfil de solidez, sustentado por la lealtad y el alineamiento de las elites y los votantes.

Se ha mencionado el movimiento mapuche y su primigenia vinculación con los partidos políticos, lo que a nuestro juicio inhibe su despliegue genuino y su conformación como movimiento social autónomo y consolidado. Merece subrayarse, no obstante, que los mapuches expresan sus demandas y reivindicaciones a través de varias organizaciones sociales, una de las cuales colocamos como ejemplo en nuestro estudio; se trata de Ad-Mapu. No todas las formaciones mapuches responden linealmente a las orientaciones de sectores o partidos políticos; lo que intentamos demostrar es que la influencia ejercida por estos puede llegar al grado de determinar de manera exógena las estrategias, luchas y orientaciones incluso normativas de los movimientos sociales, restándoles capacidad para generar contribuciones relevantes en el sistema democrático, al tiempo que reduce su legitimidad social. Aparentemente ello aconteció con Ad-Mapu, al menos en la etapa en la cual la disputa por su control hegemónico obturó las chances de crecimiento y maduración como actor social. Otros referentes en el movimiento mapuche intentaron emerger con una fisonomía propiamente autónoma; tal el caso de la Coordinadora Arauko-Malleko, muy activa en los últimos años, o el Consejo de Todas las Tierras, que sin embargo, por sus vacilaciones y cierta ambigüedad, no se constituyó aún en actor social de fuste. Todos ellos recalcan la necesidad de considerar seriamente el problema étnico-cultural de la población mapuche en el marco de una tendencia a subsumirse en la “cultura nacional chilena”. En síntesis, el movimiento mapuche cuenta con un importante potencial de activos socioculturales y organizativos, para perfilarse como actor social de primer orden en un escenario de movilización y articulación de sus diversas organizaciones representativas, a condición de no sujetarse a designios “externos” en el diseño de sus itinerarios programáticos y estratégicos.

Por su lado, la CUT adquirió un enorme relieve en los tiempos de la resistencia a la dictadura, y durante toda la fase de transición democrática. Esta central sindical se formalizó en 1992, aunque ya estaba constituida como movimiento obrero en los primeros años de la década del ochenta, recogiendo las banderas y acumulaciones de sus precedentes organizaciones sindicales (la histórica Central Única de Trabajadores, y más adelante la Coordinadora Nacional Sindical, surgida en 1975). Encuadrada en las coordenadas de la “cultura del consenso” generalizado en Chile, la CUT formuló una política dirigida a establecer

los parámetros de recuperación de los niveles salariales y de participación y acuerdo respecto del empleo y la reestructuración productiva con los gobiernos de la Concertación, la que condujo a mantener una predisposición al diálogo con el empresariado nacional y el gobierno como mediador, sobre el supuesto de sostener una transición con el menor grado de conflictividad posible, siempre que no se vulneraran los derechos de los trabajadores. En este caso, también funcionaron los arreglos políticos e institucionales con los partidos políticos de la Concertación, que contaban con un correlato de dirigentes y líderes sindicales afines. De hecho, la continuidad del modelo neoliberal iniciado tempranamente por el gobierno autoritario fue asegurada por los pactos suscritos entre el trabajo y el capital, y las intervenciones oportunas del Estado.

El sistema político poderosamente institucionalizado preserva la centralidad de los partidos políticos en el juego democrático y tiende a tamizar los conflictos sociales canalizándolos por la vía privilegiada de la negociación política, lo que podría explicar la relativa debilidad de los movimientos sociales en su capacidad de articular y liderar un proceso de expansión de la democracia, en una etapa signada –según hemos constatado– por la caída pronunciada de la confianza en los partidos políticos y en el Parlamento. La autonomía de la CUT es media en referencia al Estado y los partidos políticos; la actual coyuntura manifiesta una intencionalidad clara de los sectores más a la izquierda, orientada a influir mucho más activamente en las orientaciones estratégicas de la central sindical, abandonando la idea de “tregua” acordada y el diálogo para el consenso, fraguadas en los inicios de la transición democrática. Las últimas declaraciones públicas de la Central insinúan un camino de confrontaciones con el gobierno y los grandes grupos empresarios.

PARAGUAY

La larga y férrea dictadura del general Alfredo Stroessner en Paraguay y la apropiación de casi todos los resortes de poder (económico, social, político y cultural) por parte del Partido Colorado parecían no dar paso a ninguna fisura, que siquiera permitiera aprovechar los finos intersticios para intentar modificar el establishment totalitario conservador. Pese a la espesura de la trama burocrático-autoritaria y el manejo discrecional arbitrado tanto por el Partido Colorado como por las Fuerzas Armadas, en alianza perfecta de intereses y cosmovisiones ideológicas compartidas, la realidad de los últimos catorce años en Paraguay se ha visto convulsionada por acontecimientos episódicos, más que determinada por procesos de auténtica democratización. La caída del dictador no culminó necesariamente en el reparto plural del poder acumulado

durante décadas, sino en la autogeneración de contradicciones en la propia fuerza hegemónica del coloradismo.

El 3 de febrero de 1989 Stroessner fue derrocado por el general Andrés Rodríguez, quien inmediatamente convocó a elecciones en las que él mismo se postularía, obteniendo finalmente el triunfo en las urnas por una diferencia abrumadora. La oposición logró lentamente abrir espacios de participación, tanto a nivel político (cuya fuerza principal estuvo en el Partido Radical Liberal Auténtico de Domingo Laino) como a nivel social, con la formación del Movimiento Intersindical de Trabajadores, agrupaciones campesinas y otras organizaciones de la sociedad civil. Es recién en 1991, en ocasión de celebrarse las primeras elecciones municipales libres en más de cuarenta años, que las fuerzas opositoras conquistaron la alcaldía de Asunción (Carlos Filizzola) y nueve años más tarde, en el año 2000, el PRLA logró vencer, cuando se eligió el vicepresidente para suplantarlo al asesinado Argaña. Enfrentamientos entre facciones del Ejército, intento de golpe de Estado de Lino Oviedo, acusaciones por corrupción al presidente González Macchi, y el actual gobierno electo en 2003, también del Partido Colorado (aunque aparentemente se trata de una corriente del coloradismo más bien renovadora y más democrática en sus componentes y discurso), dan cuenta de la evolución reciente del proceso político paraguayo.

Según el esquema de Mainwaring y Scully, nos hallamos frente a un sistema político hegemónico en transición, en el que un partido predomina en el mapa político, en la gestión de gobierno, en el control del aparato estatal y en el manejo de las clientelas que sostuvieron su poder construido durante décadas de autoritarismo *manu militari*, aun admitiendo una cierta renovación en su interior y apertura a aceptar mayores grados de pluralismo. Según los datos registrados por el Latino-barómetro, la confianza en los partidos políticos se ubicaba en un 37% en 1996, para pasar a situarse en un 11,7% en el año 2003, lo que indica una pérdida importante en el período considerado. Al tener en cuenta la confianza en el Parlamento, visualizamos también un descenso notorio, desde un 41,6% de la población que lo valoraba positivamente en 1996 hasta un 13,3% en el año 2003, baja sustancial, como decíamos, en referencia a una institución paradigmática para la democracia. Si tomamos los valores correspondientes a la figura del Presidente, partimos del 39,8% de confianza en 1996 para llegar al 14% en el año 2003, que sólo registra una suba en 1998, cuando la confianza supera el 53% de la ciudadanía. Respecto del grado de satisfacción con la democracia, la evolución es decididamente negativa: pasó del 21,41% en 1996 a un magro 7% de la población que declaraba estar satisfecha con la democracia en 2003. Sin embargo, nos parece sumamente ilustrativo el dato de la abstención electoral; el porcentaje de la ciudadanía que concurre a votar en las elecciones (tomamos la referencia de las tres últimas) pasó de un 33,38% de

votos emitidos sobre el total de habilitados en 1993 a un 59,43% en 1998; a partir de dicho incremento notable podría inferirse que se produjo una revalorización de la instancia electoral y una intención clara de por lo menos –influyendo en la selección de los elencos de gobierno– participar de ese modo en los asuntos políticos del país. Es decir, la esencia de la democracia pervive en una de sus condiciones básicas o mínimas: la posibilidad de decidir votando, o la opción de elegir. Por último, el número efectivo de partidos para el año 2003 era igual a 3,5, luego de estar ubicada entre un 2 y un 2,9 desde 1993.

En cuanto a los movimientos sociales, los rasgos característicos de fragmentación, descoordinación, atomización y desarticulación estarían subsanándose en la medida en que las dos organizaciones campesinas más importantes, la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), han logrado converger en un ámbito común de definiciones estratégicas, de luchas y movilizaciones populares. En los últimos años, conforme el modelo neoliberal fue adquiriendo dimensiones más perjudiciales para los intereses de las clases trabajadoras (obrero y campesina), el discurso político y la protesta social se volvieron más antineoliberales; basta recordar los capítulos de la movilización paraguaya en contra de las privatizaciones (con logros importantes en su haber). Asimismo, los diversos actores sociales han jugado un papel relevante en el escenario de turbulencias político-institucionales acaecidas en los últimos diez años, sobre todo en el caso de un remozado movimiento juvenil (de variado origen). El movimiento sindical, con momentos de auge y declive (sobre todo en la década del noventa), parece estar resurgiendo, fuertemente vertebrado en organizaciones de trabajadores del sector público (movilizados para frenar las oleadas de privatizaciones).

Los dos espacios de articulación social, la Plenaria Popular y el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, finalmente acordaron la conformación del Congreso Democrático del Pueblo en el año 2002, lo que sin duda revela una maduración de plataformas ampliadas, que integran tanto a movimientos sociales como a sectores y partidos políticos de la oposición. También atravesados por la influencia de algunas corrientes de los partidos políticos de centro e izquierda, dichos movimientos aparecen con un grado importante de autonomía, expresada en la unidad construida a partir de un cruce de intereses sectoriales que no procuran la hegemonía de unos sobre otros, preservando, pues, ese margen de actuaciones no sujetas a designios exógenos. De todos modos, el nivel de organicidad es muy variado, en tanto que la capacidad de convocatoria y movilización social, si bien es significativa, no logra aun despertar acciones sociales masivas, salvo en marchas o cortes de ruta de campesinos. Hay, en consecuencia, algunas señales desde los movimientos sociales que

denotan una intencionalidad clara en aras de ocupar los espacios de partidos políticos que perdieron una base de legitimidad en el período considerado, pero sin lograr resultados plausibles, por su carácter anti-sistémico y portador de un proyecto democratizador (aún incipiente), y alternativo al esquema dominante.

VENEZUELA

Tras cuatro décadas de relativa estabilidad democrática, fundada en el acuerdo de Punto Fijo, del cual deriva el sistema político contemporáneo que ha sido caracterizado como de bipartidismo (Acción Democrática y COPEI), Venezuela sufrió un “sacudón” en 1989, anticipando el posterior desmoronamiento del statu quo establecido en 1958. Tras la sucesión de gobiernos en que alternaron los democristianos y la socialdemocracia, a fines de los años ochenta y a consecuencia de la dureza en la aplicación de medidas de corte neoliberal, y la corrupción expandida a todos los niveles del Estado y de los actores sociales corporativos, la sociedad venezolana ingresa en un tobogán que vertiginosamente precipita una sucesión de acontecimientos: primero los intentos de golpe de Estado en 1992, luego la crisis desatada por el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez por acusaciones de corrupción, después el colapso de ambos partidos tradicionales en las elecciones del año 1998, y finalmente la irrupción del movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez Frías, que inaugura un nuevo ciclo en la política nacional.

Ciertamente mucho más convulsionada, esta nueva etapa implicó una ruptura drástica con un pasado anudado a la política del consenso, así como supuso el desmantelamiento de las estructuras sociales, culturales y políticas que tuvieron como resultado la postración de la enorme mayoría de la población en la pobreza y la marginalidad, en contraste con una elite cargada de privilegios y prebendas. Los dos partidos políticos que trazaron la vida de la nación venezolana en los cuarenta años de hegemonía dieron paso a la multiplicación de fuerzas políticas, algunas sin historial, en tanto que otras, reconvertidas o reagrupadas tras el colapso del sistema de partidos, intentaron suplir los vacíos dejados por aquellos. Si consideramos el modelo de Mainwaring y Scully, habremos de constatar que de aquel sistema institucionalizado ubicado por los autores en su máximo esplendor, con las calificaciones más altas, ya no queda nada o, mejor dicho, sólo las reminiscencias y estertores propios de una agonía no muy lenta. Así, luego de haber asumido la presidencia, Hugo Chávez tuvo que enfrentar una oposición civil y luego cívico-militar que desembocó en el golpe de Estado de abril del año 2002, encabezado por las dos corporaciones más poderosas (FEDECÁMARAS y la CTV, con la connivencia del Departamento de Estado norteamericano), ambas vinculadas estrechamente a

los partidos que gobernaron durante cuarenta años en Venezuela. Tras el retorno inmediato del presidente depuesto, la oposición no cesó en su intento de derrocar al gobierno de Chávez, al mismo tiempo que se movilizaba la población a favor, pero también en contra del presidente. La polarización es hoy en día el principal rasgo del sistema político, y establece una línea demarcatoria muy nítida entre chavistas y antichavistas, ciertamente en clave clasista.

Al examinar los datos del Latinobarómetro, observamos que la confianza en los partidos políticos pasó del 11% en 1996 a un 13,8% en el año 2003, evolución que expresa una tendencia ligeramente al alza, pero desde un punto de partida muy bajo. Sin embargo, la serie examinada muestra que hasta el año 2001 la tendencia iba en aumento, hasta alcanzar un 29,6% de confianza en los partidos políticos en ese año, lo que podría revelar una recuperación de la credibilidad (recuérdese que nuevas organizaciones políticas irrumpen en la competencia electoral, como por ejemplo el MVR). En segundo lugar, respecto de la confianza en el Parlamento, los datos indican una evolución semejante a la de los partidos políticos; es decir, una tendencia a incrementar la confianza desde 1996, con un 18,8%, hasta el año 2001, con un 36,9%, para luego caer fuertemente hasta situarse en el año 2003 nuevamente en un 18% de la población que valoraba positivamente la faena parlamentaria. En tercer lugar, en cuanto a la consideración del presidente, arranca la serie en un 16,3% de confianza en 1996, para pasar al 27,6% en el año 2003, lo que implica un aumento notable habida cuenta de las turbulencias sociales y políticas verificadas en el mismo período. Corresponde acotar, sin embargo, que el máximo valor alcanzado se ubicó en 1999 con un 68,3%, que coincide con la asunción del presidente Hugo Chávez, para luego iniciar un decrecimiento hasta llegar a los valores antes mencionados. Finalmente, con relación al grado de satisfacción con la democracia, en 1996 se expresaba satisfecho un 30% de la población, en tanto que en el año 2003 la proporción era del 38%. También interesante resulta esta serie, que evidencia una subida considerable en 1999, con un 54,5% de venezolanos satisfechos con la democracia, dato consistente si se lo compara con la confianza en el presidente.

En el campo de los movimientos sociales, el *caracazo* fue un hito del año 1989, y años más tarde, más movilizaciones en contra de la corrupción, paros y marchas; luego el colapso del sistema de partidos y la inauguración de un período de creciente dualización social y política, en el que se instala la antinomia chavismo-antichavismo. Este contexto de pérdida de confianza en los partidos políticos –como se señaló, de apenas un 11% en 1996– ya se advertía en encuestas divulgadas en el año 2000, con un alto porcentaje de la población que tildaba de corruptos “a todos los adecos y copeyanos”, que contrastaba con la valoración aún muy positiva del movimiento vecinal. Si bien este movimiento,

proveniente de las zonas urbanas medias y bajas, tuvo una etapa significativamente fuerte en las décadas del setenta y ochenta, donde aparece como referente de la sociedad civil organizada para democratizar los sistemas electivos, decae a principios de los noventa, para luego resurgir de la mano de los círculos bolivarianos y del Polo Patriótico, inspirados en una regeneración del tejido urbano, pero “funcionalizados” por los aparatos políticos del oficialismo –aunque una corriente de aquel movimiento vecinal ahora aparece vertebrada alrededor de Queremos Elegir, un actor social de reciente formación y más autónomo.

Los movimientos de buhoneros (vendedores ambulantes) y de pensionados y jubilados, que transitan por procesos de protesta y movilización social de carácter más reivindicativo, aparecen más recostados a la lógica del grupo de interés, menos estructurados y organizados, con un discurso volcado al reclamo por trabajo y restitución plena de sus derechos como ciudadanos. Cuentan con una buena capacidad de convocatoria y movilización, pero sus plataformas no asumen en la práctica un sesgo antisistémico. El movimiento estudiantil, retonificado, se percibe mucho más autónomo tanto respecto del Estado y del gobierno como de los partidos políticos de oposición, entonados por un discurso focalizado en el antiimperialismo y de inequívoco contenido antineoliberal. El movimiento sindical aparece ahora mucho más fragmentado y dividido por el eje que delimita, por un lado, una central sindical (CTV) alineada con la oposición y anclada en los antiguos lazos con el partido político AD (socialdemócrata) y, por otro, sindicatos y federaciones (algunos de muy reciente conformación) que responden a la línea prochavista, dejando poco margen para las corrientes autonomistas. Algo similar acontece con los movimientos campesinos y las diversas organizaciones gremiales de pequeños productores y cooperativistas en estado embrionario, muchas de las cuales nacen al abrigo y fomento del Estado.

En síntesis, los vínculos privilegiados entre las principales corporaciones, movimientos y actores sociales (sobre todo el movimiento obrero y el campesino) con los partidos políticos que hegemonizaron la vida política durante cuarenta años (1958 a 1998), en clave de “cuasi dependencia” orgánica y estratégica, impidieron una expansión autónoma de aquellos movimientos sociales en términos de contribuciones eficaces para la consolidación y reformulación del sistema democrático, después del colapso del sistema de partidos. Pareciera que, en particular, la otrora poderosa central sindical (CTV) hubo de ser arrastrada, junto con los partidos políticos, al barranco de la deslegitimidad social. El papel de la CTV en el frustrado golpe de Estado del año 2002 la dejó muy mal parada, generando el campo propicio para su división interna y fragmentación posterior. Las ataduras actuales de los nuevos movimientos sociales –en términos generales– con otras organizacio-

nes políticas de izquierda o proclives al MVR tampoco favorecerían el desempeño de un papel central en las controversias por el poder social y político. La polarización exacerbada entre el chavismo y el antichavismo no genera espacios de desarrollo autónomos (que no es lo mismo que la indiferencia de los actores sociales en tiempos de definiciones estructurales); antes bien, empuja nuevamente a la inhibición de potenciales aportes no mediados por el sistema político. Los clivajes giran en torno al poder de la élites vinculadas al capital y la disputa por el control de los recursos estratégicos (petróleo, tierras y recursos primarios), la democratización efectiva en la designación de los elencos de gobierno, el mantenimiento de privilegios y la reestructuración de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil (nueva democracia participativa, reapropiación del territorio y formas asociativas de producción, revisión de los viejos mecanismos de redistribución de la renta, ensayo de nuevos patrones de desarrollo económico).

Para 1995 Venezuela se caracterizaba por contar con un sistema político altamente institucionalizado, con alta regularidad y estabilidad (y también alternancia en el gobierno), confianza y legitimidad, bien enraizado, sobre la base de fuertes conexiones con organizaciones sociales e identificación partidaria, con estructuras políticas sólidas en virtud del alineamiento, la disciplina y lealtad de las élites y los votantes. Este sistema ingresó, hace ya más de un lustro, en una profunda depresión y crisis, que le resquebrajó totalmente las plateas y pilares fundacionales. Dicho de otra manera, a partir de 1995 (tal vez antes) ingresó en una fase marcada por un sistema político incoativo, en el cual el sistema de partidos se desfondó completamente, para ubicarse en el año 2003, según los criterios e indicadores manejados por Mainwaring y Scully, en la categoría de sistema débilmente institucionalizado. No obstante ello, el modelo de análisis utilizado –tal como hemos señalado– no da cuenta cabalmente de las transformaciones radicales que se observaron en los últimos diez años en Venezuela. En esta zona de turbulencia, los movimientos sociales retomaron impulso, pero no el suficiente como para constituirse en interlocutores decisivos en el reordenamiento de las relaciones de poder. Las expectativas siguen aún depositadas en la capacidad del Estado para autotransformarse y, por derivación, transformar las estructuras arcaicas de una sociedad política que amanecía fosilizada en las postrimerías del siglo pasado. La centralidad del Estado forma parte de la topografía del conflicto político actual.

CUADRO 13
COMPARATIVO DE SISTEMAS POLÍTICOS 2003 (EN PORCENTAJES)

Perfil del sistema político	Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (última elección)	Sistema de partidos (NEP, última elección)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
Argentina	13,50	8,30	79,38 (1999)	2,50 (1999)	44,60	34,00
Brasil	28,50	15,80	79,53 (2002)	3,50 (2002)	42,30	28,00
Chile	22,30	13,40	72,79 (1999)	2,20 (2000)	47,20	33,00
Ecuador	5,80	5,00	72,68 (2002)	6,20 (2002)	9,90	23,00
Paraguay	13,30	11,70	59,43 (1998)	3,50 (2003)	14,00	9,00
Uruguay	26,50	17,90	94,71 (1999)	3,10 (1999)	19,20	43,00
Venezuela	18,60	13,80	56,50 (2000)	3,40 (2000)	27,60	38,00

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

CUADRO 14
MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS 2003

	Argentina	Brasil	Chile	Ecuador	Paraguay	Venezuela	Uruguay
Sistemas de partidos	Institucionalizado, inestable.	Incoativo, con tendencia a la institucionalización.	Institucionalizado.	Incoativo, fragmentado.	Hegemónico en transición.	Con bajo nivel de institucionalización.	Institucionalizado.
Movimientos sociales	Autonomía alta.	Autonomía media y alta.	Autonomía media y baja.	Autonomía alta y media.	Autonomía media.	Autonomía media y baja.	Autonomía media.

Fuente: elaboración propia.